

Ministro de Seguridad afirmó el lunes que la política de ese sector del gobierno anterior es "suficiente" Analistas ven costos por "reconocer" a Boric, pero valoran "tono de Estado" de Arrau

Si bien expertos destacan que la política sea a largo plazo, Pablo Ortúzar (IES) prevé una semejanza entre los dichos de Arrau y las llamadas "vueltas de carnero" que Boric "nunca explicó" durante su mandato.

A. ASTUDILLO y O. RODRÍGUEZ

Polémica ha causado la afirmación del ministro Martín Arrau de que la política de seguridad elaborada durante la administración del Presidente Gabriel Boric es "suficiente".

El ahora titular de Seguridad fue enfático al señalar que existe una Política Nacional de Seguridad Pública que "está vigente, la promulgó el Presidente Boric, dura seis años, y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro. Por tanto, en nuestra posición vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente, que le quedan más de cinco años de funcionamiento".

SEIS AÑOS dura la Política de Seguridad Pública que promulgó el gobierno anterior.

El primer "flanco" del nuevo ministro

La afirmación reforzó la ofensiva desplegada por exministros del Presidente Boric contra la actual administración. La exvocera Camila Vallejo, por ejemplo, publicó en X que "el gobierno de Kast por fin dice cuál es su Plan de Seguridad: el plan del gobierno de Boric. Parece chiste" (ver página C 4).

La principal promesa de campaña de Kast fue mejorar la seguridad de los chilenos. Y desde que su equipo se instaló en La

Moneda han sido críticos de la gestión de la administración anterior en esa materia.

Para el investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) Pablo Ortúzar, "no necesariamente" la declaración de Arrau le da "crédito" al gobierno de Boric. Esto, argumenta el antropólogo, porque "es distinto decir que la legislación es suficiente como marco para la acción a considerar que la acción del gobierno anterior fue suficiente".

Sin embargo, el analista previene que los dichos del nuevo titular de Seguridad —militante del Partido Republicano— pueden asemejarse a las llamadas "vueltas de carnero" del expresidente Boric. "Los republicanos, como oposición, siempre dispararon a la bandada con críticas generales y muy vehementes, por lo que es esperable que esto les abra un flanco político", advierte.

“La declaración del ministro Arrau fue correcta y valiente (...). Osada, probablemente, para quienes desde el oficialismo siguen creyendo que todo hay que hacerlo desde cero”.

JORGE BURGOS
 EXMINISTRO DEL INTERIOR DEL SEGUNDO GOBIERNO DE MICHELLE BACHELET



En medio de las críticas, ayer el ministro Martín Arrau llegó a Estación Central, donde encapuchados habían quemado un bus del transporte público. "Hay personas que están dispuestas a todo para reivindicar causas", advirtió.

Para Ortúzar, durante estos 70 días de Gobierno "es más o menos claro que no había un plan, más allá de tratar de gestionar lo mejor posible el ministerio (de Seguridad). Es muy pronto para juzgar que han fallado en ese objetivo, pero claramente es una realidad bastante menos grandiosa que la que proyectaron con

grandilocuencia mientras fueron oposición".

Ximena Jara, analista política y exasesora de la Presidenta Michelle Bachelet, cree que es "positivo, aunque sorprendente, que, tras una campaña entera y dos meses de gestión en los que se desmereció completamente la gestión de seguridad del go-

bierno pasado, el ministro Arrau reconozca que la política de seguridad del Presidente Boric va en la dirección correcta".

"Tono de Estado, y no de trinchera"

Ayer, el propio titular de Seguridad respondió a estas críti-

“Es más o menos claro que no había un plan, más allá de tratar de gestionar lo mejor posible el ministerio (...). Claramente es una realidad bastante menos grandiosa que la que proyectaron con grandilocuencia mientras fueron oposición”.

PABLO ORTÚZAR
 INVESTIGADOR DEL IES

“Desde una mirada técnica, se agradece que exista cierta continuidad. Todos estos temas son de largo plazo y requieren de tiempos de planificación y diseño, pero sobre todo de implementación”.

FRANCISCA WERTH
 EXDIRECTORA EJECUTIVA FISCALÍA NACIONAL

cas. "Confundir los términos me llama mucho la atención (...). A la gente, y estas discusiones políticas... no hay cosa que le importe menos. Lo que importa es la efectividad, ver la mejora de las cifras", aseguró.

El director ejecutivo del IES, Claudio Alvarado, cree que la declaración de Arrau es una "buena noticia". Primero, porque "reivindica la existencia de una Política Nacional de Seguridad Pública que no depende del gobierno de turno"; y segundo, porque lo que hace su afirmación es "dotar de un tono de Estado, y no de trinchera, al discurso del Gobierno en seguridad".

Para el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, utilizar la política desarrollada por el gobierno anterior "no implica necesariamente ausencia de plan propio", pues "lo relevante será conocer cuáles son las medidas concretas que este Gobierno propone para enfrentar los desafíos actuales y, sobre todo, cómo implementará esas medidas".

Según el exfiscal Luis Toledo, aunque la discusión puede prestarse para una "lectura política", desde la perspectiva de las políticas públicas "la seguridad no debería operar bajo una lógica de refundación cada cuatro años". La frase de Arrau, precisa, "puede generar tensión comunicacional, porque las campañas suelen enfatizar diferencias profundas y cambios relevantes. Gobernar, en cambio, obliga a operar con instituciones ya existentes y restricciones reales".

Desde el Ejecutivo, el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, defendió a Arrau, argumentando que es "extremadamente trabajador". Sobre la política de seguridad, planteó que "si usted no tiene personal, tiene problemas (...). Tenemos cuatro mil carabinieri menos que cuando partió el gobierno anterior".

Continuidad de medidas es bien vista desde el plano técnico, pero cobran importancia nuevos anuncios

Remarcando su análisis desde un punto de vista técnico, expertos y exautoridades valoran que se mantengan las políticas públicas en el marco de la seguridad.

Así, el exministro del Interior Jorge Burgos sostiene que "la continuidad no es mala per se. Da cuenta de la mantención de una política más allá de los periodos presidenciales, por cierto que habrá espacios para nuevas estrategias, énfasis".

Mientras que el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, coincide, y asegura que "la continuidad en seguridad no solo es sensata, sino necesaria. Los países que logran avances sostenidos en reducción de violencia y

crimen organizado suelen construir políticas de Estado y no únicamente políticas de gobierno".

El exfiscal y director del Cespro de la USS, Luis Toledo, añade que "la continuidad es más una necesidad que una debilidad. Las organizaciones criminales no funcionan con ciclos electorales".

Sistema penitenciario y delitos complejos, debieran ser nuevos ejes

Pero todos coinciden en que hay desafíos importantes de cara a los anuncios que prepara el Ejecutivo en la Cuenta Pública y en el Congreso.

Al respecto, Johnson plantea que actualmente enfrentamos "fenómenos asociados al control territorial por parte de organizaciones criminales, además de delitos altamente visibles y violentos como encerronas, turbazos y extorsiones. Eso exige respuestas rápidas en materia de control policial, inteligencia e investigación penal".

No obstante, identifica también desafíos "estructurales e institucionales", detallando que "uno de los más urgentes es la situación del sistema penitenciario. El alto nivel de ocupación y la creciente presencia de crimen organizado dentro de las cárceles generan riesgos reales de colapso y difi-

cultan cualquier estrategia efectiva de reinserción y control criminal".

Coincide con lo anterior la ex directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional Francisca Werth, quien sostiene que tres prioridades serían la "reforma penitenciaria, sobre todo el traspaso de Gendarmería a Seguridad y la gobernanza del sistema; énfasis en la coordinación interinstitucional de las instituciones de sistema de justicia penal, y énfasis en prevención social en niños y jóvenes".

Toledo, en tanto, añade que el debate comienza a desplazarse hacia una segunda etapa de reforma, "donde la discusión ya no se centra únicamente en crear delitos o aumentar sanciones, sino en

fortalecer la arquitectura procesal para enfrentar fenómenos complejos: investigaciones más sofisticadas, mejor inteligencia criminal, persecución patrimonial, coordinación interinstitucional y mecanismos de evaluación permanentes".

Johnson señala que el Gobierno, además, deberá "equilibrar medidas reactivas con políticas preventivas de largo plazo", y advierte que "concentrarse únicamente en respuestas de corto plazo puede generar efectos limitados o transitorios. El desafío de fondo es fortalecer las capacidades permanentes del Estado para enfrentar una criminalidad que hoy es más violenta, más organizada y más adaptable que hace algunos años".